

Capítulo duodécimo

Bukele: ¿El salvador de El Salvador? Los desafíos de un modelo político y de seguridad

Rocío de los Reyes Ramírez

Resumen

El Salvador permanece bajo estado de excepción desde hace dieciocho meses, desde el 27 de marzo del pasado año de 2022. La medida, que había sido solicitada al Congreso por el presidente Nayib Bukele desde su cuenta de Twitter (ahora X), fue aprobada en principio para un mes, pero se ha ido renovando periódicamente hasta el día de hoy, con los votos de sesenta y siete diputados de un total de ochenta y cuatro durante una sesión extraordinaria convocada por Ernesto Castro, líder de la Asamblea Legislativa. Estas sucesivas ampliaciones merman el derecho a un juicio justo en nombre de la seguridad pública.

Este país, el más pequeño de Centroamérica, era conocido como la capital de los asesinatos del hemisferio, con uno de los índices de homicidios más altos del mundo exceptuando de las zonas de guerra, a causa de las pandillas o «maras», los principales actores criminales que operaban en el territorio.

Ante esta espiral de violencia, la estrategia del Gobierno de aplicar una política de mano dura que incluye redadas, controles y detenciones masivas, parece haber impactado significativamente en las pandillas. Esta táctica, aunque bien recibida por los

ciudadanos salvadoreños y algunos analistas regionales, no lo ha sido tanto por las organizaciones internacionales, que han instado al presidente Bukele a respetar los derechos humanos y lo han acusado de abuso de poder.

Palabras clave

El Salvador, Bukele, Maras, Pandillas, Centroamérica, Violencia, Seguridad.

Bukele: ¿The savior of El Salvador? The challenges of a political and security model

Abstract

El Salvador has been under a state of emergency for 18 months, since March 27, 2022. The measure, which had been requested to the Congress by President Nayib Bukele from his Twitter account (now X), was approved, initially for one month, but it has been periodically renewed until today, with the votes of 67 deputies out of a total of 84 during an extraordinary session convened by Ernesto Castro, leader of the Legislative Assembly. These successive extensions undermine the right to a fair trial in the name of public safety.

This country, the smallest in Central America, was known as the murder capital of the hemisphere, with one of the highest homicide rates in the world, apart from war zones, due to gangs or «maras», the main criminal actors operating in the territory.

In the face of this spiral of violence, the government's strategy of applying an iron fist policy, including raids, checkpoints and massive arrests, seems to have had a significant impact on the gangs. This tactic, welcomed by both Salvadoran citizens and some regional analysts, has been less well received by international organizations, which have urged President Bukele to respect human rights by accusing him of abuse of power.

Keywords

El Salvador, Bukele, Maras, Gangs, Central America, Violence, Security.

«...los más tristes del mundo
mis compatriotas
mis hermanos».

Roque Dalton¹

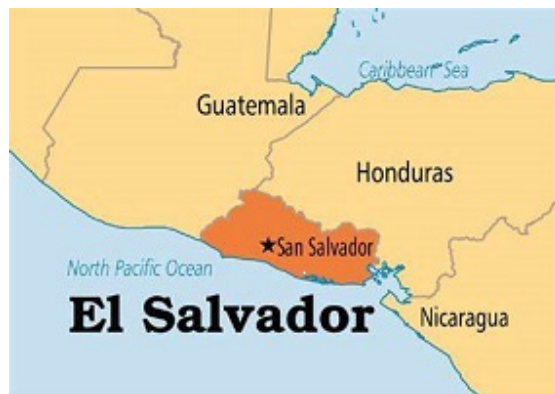
1. Introducción

El Salvador, el país más pequeño del continente sudamericano y el más densamente poblado, conocido como el «Pulgarcito de América», limita al norte y al este con Honduras, al sur con el océano Pacífico y al oeste con Guatemala.

Enfrentó un conflicto armado interno durante las décadas de 1970 y 1980. Aunque la contienda terminó con los acuerdos de paz de 1992, el país aún se enfrenta a desafíos como la violencia relacionada con pandillas y la falta de oportunidades económicas.

La ubicación geográfica de El Salvador es una ventaja significativa en las operaciones de las organizaciones criminales. Durante mucho tiempo, esto lo ha convertido en un punto de tránsito clave para el tráfico de drogas desde Colombia y la región andina hacia México y Estados Unidos, así como para la trata de personas y el movimiento de otros productos ilícitos (Urbina, 2022). Con una extensa y desprotegida costa en el Pacífico, fronteras porosas con Guatemala y Honduras, y solo un pequeño golfo que lo separa de Nicaragua, El Salvador se encuentra a caballo entre convenientes rutas de tránsito terrestres y marítimas.

En términos económicos, El Salvador se ha diversificado en las últimas décadas, centrándose en servicios, manufactura e ingresos por



¹ Poeta y ensayista salvadoreño (1935-1975)

remesas de la diáspora salvadoreña en el extranjero, sobre todo a Estados Unidos. Utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial además del bitcoin.

Hasta ahora había sido uno de los países más violentos de América Latina con altos índices de corrupción e impunidad, pero en 2019 ganó las elecciones Nayib Bukele, que dio un giro definitivo a la seguridad del país.

Para algunos, Nayib Bukele es el presidente más destacado de los últimos dos siglos en El Salvador mientras que, para otros, encarna una figura que evoca a los líderes autoritarios de una nueva era. En marzo de 2022, Bukele emprendió una ofensiva contra las pandillas que habían sembrado el terror en gran parte de la población salvadoreña durante casi tres décadas. Durante su mandato, su administración llevó a cabo la detención y encarcelamiento de más de 75 000 personas, muchas de las cuales se enfrentaron a acusaciones de homicidios múltiples. No obstante, para iniciar esta campaña, Bukele declaró el estado de excepción y se limitaron derechos fundamentales como el principio de presunción de inocencia.

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han presentado numerosos informes sobre detenciones ilegales, alegaciones de tortura en centros penitenciarios y, lamentablemente, un considerable número de muertes vinculadas a esta operación (Amnistía internacional, 2023). La situación actual en El Salvador contrasta significativamente con la de décadas anteriores, ya que las pandillas no ostentan el mismo nivel de control y poder de extorsión que previamente mantenían en gran parte del territorio salvadoreño. No obstante, expertos en la materia señalan que esta lucha contra las pandillas ha suscitado cuestionamientos sobre la salud de la democracia en el país.

2. Antecedentes

2.1. Guerra civil y acuerdos de paz

Para entender el estado actual de El Salvador es esencial examinar los antecedentes sociales y políticos que, durante la década de los setenta, establecieron un contexto complejo que contribuyó al inicio de la guerra civil en el país.

Las tensiones inherentes al sistema social de esta nación, que se hicieron evidentes a través de la pobreza y la marginación, se intensificaron en la segunda mitad del siglo xx. Esto llevó a cuestionamientos significativos del sistema social tradicional que había estado en vigor desde la segunda mitad del siglo xix.

En términos sociales, El Salvador se caracterizaba por la desigualdad extrema. La tierra y los recursos económicos estaban en manos de una élite oligárquica mientras que la mayoría de la población vivía en la pobreza más absoluta. La concentración de tierras en manos de unos pocos dejaba a muchos campesinos sin acceso a tierras para cultivar y vivir. Esta disparidad económica generaba un profundo descontento y marginación en la sociedad salvadoreña (Dada, 2017).

La pobreza era generalizada y la mayoría de la población carecía de acceso a servicios básicos como la educación y la atención médica. La falta de oportunidades económicas y la desigualdad en los ingresos eran problemas endémicos que contribuían a la sensación de marginación y desesperanza entre la población.

Los sectores económicos dominantes, en particular los productores de café, algodón, caña de azúcar, industriales y banqueros, estaban decididos a preservar su riqueza. Veían con preocupación las protestas sociales y los esfuerzos de reforma social liderados por los jóvenes militares.

Con la aparición de las organizaciones campesinas, las tensiones sociales y políticas se agudizaron y dieron lugar a un ambiente de efervescencia social nunca antes visto en la historia reciente de El Salvador. Las organizaciones populares y los sectores más radicales de las clases medias optaron por la lucha armada revolucionaria. El estamento militar endureció sus posturas y se volvió más excluyente. (González, L. A., 1999).

La represión y la violencia eran herramientas comunes utilizadas por los Gobiernos salvadoreños de la época, a menudo respaldados por intereses económicos poderosos, para mantener el control y sofocar cualquier forma de disidencia.

Esta represión no se limitaba solo a activistas políticos, sino que también se dirigía contra sindicalistas, estudiantes y cualquier persona que desafiara el *statu quo*. El clima de represión política alimentaba aún más el descontento y la resistencia.

Durante gran parte de esta década, el poder político estaba en manos del Partido de Conciliación Nacional (PCN), fundado en

1961 por militares y líderes conservadores como respuesta a la creciente influencia de los movimientos de izquierda y para consolidar el control de la élite conservadora. Durante su formación, el PCN contó con el respaldo de los sectores empresariales, terratenientes y otros grupos de poder económico, y mantuvo un control autoritario sobre el país durante varios años.

Las elecciones en El Salvador durante ese periodo estaban marcadas por el fraude electoral y por la falta de transparencia. Esto socavaba la confianza pública en el sistema democrático y generaba un creciente descontento entre la población.

En respuesta a estas condiciones de pobreza, desigualdad y represión surgieron movimientos de izquierda en la década de los sesenta y los setenta. Organizaciones como las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) comenzaron a luchar por reformas sociales y políticas a través de la resistencia armada.

Las FPL, fundadas el 1 de abril de 1970, fueron la organización político-militar más antigua de los cinco grupos armados que conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en 1980². Durante esta década, las FPL crecieron progresivamente hasta llegar a ser la mayor organización armada de izquierdas (CEDEMA, 2007). El ERP también fue una parte integral del FMLN.

Las FPL y el ERP, como muchas otras guerrillas de El Salvador y Centroamérica, fueron la expresión política de la radicalización de los estudiantes y de los sectores de clase media, así como de una vanguardia de trabajadores, que luchaban contra la dictadura militar. Las FPL comenzaron a aumentar su base social realizando trabajos políticos entre los campesinos de la zona norte y paracentral de El Salvador, y entre los estudiantes universitarios. En 1975 se creó un frente de masas, el Bloque Popular Revolucionario (BPR), que agrupaba a organizaciones campesinas y sindicatos afines a las FPL (González, 1997).

La década de los setenta también estuvo marcada por varios golpes de Estado y cambios frecuentes en la presidencia. Estos eventos reflejaban la inestabilidad política en el país y la falta de

² El FMLN llevaba el nombre de Farabundo Martí, un líder revolucionario salvadoreño del siglo xx. Incluía al Partido Comunista Salvadoreño (PCS), a las Fuerzas Populares de Liberación (FPL), al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) y al Partido de Acción Popular Unificada (PAPU).

consenso en torno a cuestiones clave como la reforma agraria y la redistribución de la riqueza.

La iglesia católica, en la voz del arzobispo Óscar Arnulfo Romero a través de sus homilías dominicales, lo que a la postre le costaría la vida, también intervenía pidiendo cambios sustanciales y solidarizándose con las víctimas de la violencia política.

Todos estos factores sentaron las bases para el descontento social y político que eventualmente condujo a un conflicto armado prolongado conocido como la guerra civil de El Salvador, que se inició en 1980 y se prolongó hasta 1992.

Podemos considerar que el conflicto armado comenzó oficialmente en 1980 con el asesinato, precisamente, de Monseñor Óscar Romero. Su muerte desencadenó una ola de protestas y agitación en todo el país, lo que llevó a grupos insurgentes, principalmente el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), a tomar las armas contra el Gobierno.

El Gobierno salvadoreño, respaldado por Estados Unidos, respondió con dureza a la insurgencia. Se llevaron a cabo operaciones militares en todo el país y se utilizaron escuadrones de la muerte, lo que hizo que se cometieran abusos generalizados contra los derechos humanos. Esta represión exacerbó la violencia y el conflicto, lo que causó la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento de cientos de miles más. La población civil sufrió de manera desproporcionada debido a la violencia y a los enfrentamientos.

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos consideraba a El Salvador como un frente en su esfuerzo por contener la influencia comunista en América Latina. Como resultado, proporcionó apoyo militar y financiero al Gobierno salvadoreño, lo que contribuyó a prolongar el conflicto y a agravar la crisis humanitaria.

La guerra dejó cicatrices profundas en la sociedad salvadoreña y dividió al país. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1980 se intensificaron los esfuerzos para encontrar una solución negociada. En 1992 se logró un acuerdo de paz, conocido como los *Acuerdos de Paz de Chapultepec*, mediado por la ONU y que puso fin a las hostilidades. Estos acuerdos establecieron una serie de reformas políticas, sociales y económicas, incluida la reforma agraria y la democratización política.

Fue un paso crucial hacia la estabilización política y la reconstrucción del país después de años de violencia y lucha entre el Gobierno

y las fuerzas guerrilleras. Entre los acuerdos alcanzados se encontraba la deposición de armas por parte del FMLN y su incorporación a la vida política, el nuevo papel que tendrían las Fuerzas Armadas y la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de la Policía Nacional Civil (*El Mundo*, 2023).

Una vez firmada la paz entre el Gobierno salvadoreño y el FMLN, este último se incorporó a la vida política democrática y se convirtió en la fuerza política opositora durante los veinte años que gobernó el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

Diecisiete años después de la rúbrica de los acuerdos de paz de Chapultepec, México, llegaría la alternancia al poder del Ejecutivo. Así, en 2009, la izquierda salvadoreña iniciaría el que quizá sería el reto más importante de su vida política: gobernar El Salvador.

2.2. Dominio Político del FMLN y ARENA: maras y crisis de seguridad

Aunque el conflicto armado terminó oficialmente con los acuerdos de paz, la reconciliación en la sociedad salvadoreña llevó tiempo y esfuerzo. Sin embargo, persistieron cuestiones pendientes que desencadenaron violencia e inseguridad. La amnistía para los crímenes de guerra generó controversia sobre la justicia y la rendición de cuentas, pero también sentó las bases para una nueva etapa en la historia de El Salvador.

A pesar de que la Policía Nacional Civil, creada en 1993, se conformó con un 60 % de personal ajeno al conflicto armado y un 20 % de cada una de las partes de los combatientes, la escasez de efectivos y de presupuesto acarrearón una importante falta de seguridad en diversas zonas del territorio, que fueron ocupadas rápidamente por grupos criminales (Pastor, 2023).

Después de la guerra, dos partidos políticos, el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), se convirtieron en los actores dominantes en la política salvadoreña, alternándose en el poder presidencial. El FMLN, la coalición de exguerrilleros, llegó al poder en 2009 con la elección de Mauricio Funes (2009-2014). Ambos buscaron implementar diversas estrategias destinadas a disminuir los niveles de violencia.

El fenómeno social que El Salvador tuvo que afrontar desde la posguerra y que aún hoy sigue afrontando es el de las maras o pandillas, que se han convertido en una prioridad para los suce-

sivos Gobiernos y que han puesto en jaque al mismo sistema judicial. En este caso, se trata de peligrosos actores cuyos fines no son ideológicos o políticos, sino particulares o grupales.

Además de las pandillas, en el territorio salvadoreño operan diversas mafias, algunas de las cuales están vinculadas a exmilitares, narcotraficantes y contrabandistas entre otros actores. Es crucial tener en cuenta la presencia de estos grupos, ya que nos brindan una visión más completa del alcance de la actuación de las pandillas en el contexto de la economía ilegal y nos ayudan a comprender su posición en la jerarquía de poder que han venido ejerciendo.

La guerra civil provocó un éxodo masivo de migrantes y, debido a la falta de oportunidades económicas y a la inseguridad, muchas familias huyeron a EE. UU., sobre todo a Los Ángeles, en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, sus hijos sufrieron exclusión social y, en algunos casos, violencia étnica. Ante esta perspectiva, estos jóvenes se integraron en pandillas mexicanas o crearon otras nuevas de nuevo cuño, como la Mara Salvatrucha (MS13) y las pandillas Barrio 18, conocidas en el argot pandillero como «las letras» y «los números» respectivamente.

No obstante, durante el periodo comprendido entre 1996 y 2005, las autoridades estadounidenses llevaron a cabo una política de deportaciones bastante rigurosa, repatriando a numerosos salvadoreños que formaban parte de estos grupos y enviándolos de regreso a su país de origen.

Una vez de vuelta, estos individuos se mezclaron con las pandillas locales y dieron origen a las peligrosas «maras». Estos grupos, altamente violentos, obtienen principalmente sus ingresos a través del tráfico de drogas, los secuestros y las extorsiones, lo que ha sumido a la población en un estado de constante temor. Si bien hay muchas pandillas que tienen decenas de miles de miembros, las dos más grandes con diferencia, responsables de la gran mayoría de la violencia y de los vínculos con otras organizaciones criminales, son la Mara Salvatrucha (MS 13) y las pandillas Calle 18. Su poder se deriva en parte de su crueldad, pero también de su alcance verdaderamente transnacional, ya que operan no solo en El Salvador, Guatemala y Honduras, sino también en cientos de ciudades de Estados Unidos.

Su presencia tuvo un impacto significativo en la seguridad pública y sus actuaciones contribuyeron a incrementar los ya altos niveles de homicidios y crímenes en el país. Las condiciones socioeconómicas difíciles y la falta de oportunidades también jugaron un papel determinante en la expansión de las pandillas.

Desde la década de 1990, diferentes administraciones salvadoreñas han luchado por controlar la violencia de las pandillas dentro del Estado de derecho. Las diferentes versiones de las políticas de «mano dura» o «mano superdura» han fracasado sistemáticamente a la hora de detener el aumento de los homicidios, los robos y la corrupción policial.

Con el tiempo, las maras aumentaron su influencia en El Salvador, desafiando a las autoridades y llegando al punto de ejercer un control efectivo. Esto ha llevado a situaciones en las que tanto los Gobiernos nacionales como los locales se han visto obligados a entablar conversaciones con estas pandillas, en ocasiones con objetivos políticos, que intentan mantener en secreto (Pastor, 2020).

Bajo el mandato de Mauricio Flores (2009-2013), se promovió un proceso de diálogo con las tres principales pandillas conocido como «la tregua». A pesar de que se observó una disminución en la tasa de homicidios durante este periodo, esta tregua resultó ser contraproducente, ya que permitió que las pandillas se rearmaran y fortalecieran su estructura interna durante los dos años que duró el cese temporal de la violencia (Aleman, 2019).

La ruptura de la tregua tuvo como consecuencia inmediata un drástico aumento en el número de homicidios, que se duplicaron a partir de 2015. Ese año alcanzaron la tasa de ciento cinco asesinatos por cada cien mil habitantes, la más alta del mundo (SRD, 2023), y en los dos primeros meses de 2016 se incrementó al 120 %, con un promedio de veintiséis homicidios diarios (Lohmuller, 2016).

La respuesta del presidente Sánchez Cerén (2014-2019) ante estas circunstancias no se hizo esperar y reavivó la lucha contra las pandillas con el Plan «Salvador Seguro», que consistió en una serie de medidas extraordinarias para combatir las. Estas medidas otorgaron al Gobierno la facultad de intervenir en los centros penitenciarios, reubicar a los reclusos y mantener los centros en un estado de emergencia constante para reforzar la seguridad (Lohmuller, 2016).

3. Situación actual

3.1. La presidencia de Nayib Bukele: transformando el horizonte político de El Salvador

La elección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador el 1 de junio de 2019 representó un punto de inflexión en la política

de este país centroamericano. Nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador, Bukele se convirtió en el presidente más joven en la historia de la nación. Su victoria electoral marcó el fin de tres décadas de bipartidismo, desafiando la tradicional alternancia entre los partidos ARENA y FMLN, que habían dominado la presidencia desde el final de la guerra civil.

Bukele ganó las elecciones como candidato de GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional), un partido de centroderecha, lo que marcó un cambio significativo en la política salvadoreña. Su presidencia de cuatro años se anticipó con una mezcla de entusiasmo y curiosidad, ya que ofrecía un enfoque fresco y una promesa de cambio en un país agobiado por la pobreza, asolado por la violencia y con una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo.

Sin embargo, lo que comenzó como un nuevo punto de partida para la república salvadoreña rápidamente se transformó en un periodo caracterizado por debates intensos, desafíos significativos y controversias crecientes. El presidente no solo ha exhibido signos significativos de autoritarismo, sino que también ha socavado de manera considerable las instituciones y ha pasado por alto numerosos mecanismos de control que deberían supervisar las acciones del poder ejecutivo.

Su carrera política comenzó a tomar forma en la década de 2010. En 2012 se convirtió en el alcalde de Cuscatlán, un municipio de El Salvador, lo que marcó su entrada en la política municipal. En 2015 dio un paso significativo al asumir la alcaldía de San Salvador, la capital del país, bajo la bandera del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), un partido de izquierda.

A medida que avanzaba en su carrera política, Bukele inició un distanciamiento gradual de sus raíces izquierdistas y adoptó posturas políticas más centristas de, en última instancia, centroderecha. Este cambio ideológico se hizo más evidente en las elecciones presidenciales de 2019, cuando se postuló como candidato de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), un partido político de centroderecha que está enfocado en temas como la seguridad pública, la economía de mercado y la lucha contra la corrupción.

La campaña presidencial de Nayib Bukele fue un fenómeno político en sí misma. Se presentó como un *outsider* y un «anticasta», distanciándose de los partidos tradicionales que habían dominado la política salvadoreña durante décadas. Su mensaje de cambio resonó en un electorado cansado de la corrupción gubernamental

y de la falta de avances en asuntos clave como la seguridad y el desarrollo económico.

Su elección como presidente generó una gran expectativa entre los salvadoreños, que ansiaban un cambio en la política y un liderazgo que abordara los problemas urgentes que enfrentaba el país, como la violencia de pandillas, la falta de empleo y la inseguridad.

Al asumir su mandato, el autoproclamado «presidente más *cool* del mundo»³ introdujo un estilo de liderazgo único que captó la atención de muchos. Empleó las redes sociales, en particular Twitter, de forma activa y directa para interactuar con la población y para tomar decisiones políticas. Este enfoque le brindó la oportunidad de establecer una conexión directa con un amplio público y de abordar eventos y desafíos de manera inmediata.

Si bien este método le valió un gran seguimiento en línea y un apoyo popular en los primeros meses de su presidencia, también generó críticas y preocupaciones. Algunos argumentaron que su enfoque en las redes sociales y su estilo directo de toma de decisiones podían socavar las instituciones democráticas y el proceso político tradicional (Sherman, 2021), aunque, hasta las elecciones parlamentarias de 2021, solo contaba con diez escaños del total de ochenta y seis que conforman la Asamblea Legislativa.

Una de las primeras medidas al llegar al poder fue la firma del convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear la CICIES, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador. A través de un decreto presidencial, criticado por algunos congresistas, el presidente estableció que la comisión podrá investigar las ciento cinco entidades del Estado. Esta acción, una de sus principales promesas de campaña, se tomó con el objetivo de abordar la corrupción y la impunidad en el país, problemas que habían minado la confianza pública en las instituciones gubernamentales y que eran considerados como obstáculos para el desarrollo y la estabilidad de la nación (*El Salvador Times*, 2019).

Sin embargo, esta comisión no duró más de veintiún meses, ya que Bukele anunció la terminación unilateral del acuerdo y argumentó que la CICIES había cumplido su propósito y que las instituciones judiciales y de control interno en El Salvador eran

³ Nayib Bukele (@nayibbukele) 7-06-19 https://x.com/nayibbukele/status/1136838876884970717?s=46&t=hadwykvSvV_YH9vWsJxkQ

capaces de abordar adecuadamente los problemas de corrupción. Sin embargo, sus críticos sostuvieron que la terminación de la CICIÉS representaba un debilitamiento de los mecanismos de supervisión y un obstáculo para la rendición de cuentas.

Entre los asuntos más prominentes están sus confrontaciones públicas y su relación con el Congreso y la Corte Suprema, así como sus drásticas medidas frente al coronavirus.

Estos sucesos generaron preocupaciones sobre el respeto al Estado de derecho y a la separación de poderes en el país tanto a nivel nacional como internacional.

Esta inquietud hacia el presidente salvadoreño aumentó significativamente cuando, en febrero de 2020, protagonizó un controvertido episodio al entrar en la Asamblea Legislativa acompañado por policías y militares con la pretensión de que aprobaran la financiación de parte de su plan de seguridad, ya que consideraba que los diputados no estaban siendo ágiles en el cumplimiento de sus deberes (BBC, 2021a).

Este hecho fue catalogado por la oposición como un «autogolpe de Estado», pero ni generó preocupación en el país ni afectó al respaldo de los ciudadanos a su presidente. Es más, un año después logró vencer la férrea oposición de la Asamblea Legislativa y consiguió el control total y absoluto de esta institución. Su partido, Nuevas Ideas, ganó las elecciones, lo que le permitió poder legislar a su antojo. Y así sucedió, pues la primera acción de la asamblea fue la destitución de los funcionarios de justicia con los que el presidente salvadoreño había tenido enfrentamientos públicos sobre algunas medidas que intentó adoptar durante la pandemia: cinco jueces y cuatro suplentes de la Sala Constitucional, la más alta instancia de la justicia salvadoreña.

Asimismo, tuvo lugar la destitución del fiscal general Raúl Melara por los cuestionamientos a su independencia e imparcialidad debido a sus supuestos vínculos con el partido opositor ARENA. Melara investigaba casos de corrupción en varios ministerios del Gobierno de Bukele así como un supuesto acuerdo del presidente con la mara Salvatrucha.

Estados Unidos y organismos internacionales como la OEA mostraron preocupación por la democracia en El Salvador y por la falta de independencia del poder judicial. Kamala Harris declaraba a través de Twitter que «nos preocupa profundamente la democracia de El Salvador a la luz de la votación de la Asamblea

Nacional para destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte»⁴.

No obstante, pese a todas estas críticas, el mandatario sigue contando con un gran apoyo popular, ya que, para muchos en ese país, sigue siendo el político, como él mismo ha declarado para justificar estas acciones, «que está limpiando la casa», y los salvadoreños parecen celebrar la manera de gobernar de su presidente.

No debemos pasar por alto, para comprender plenamente el panorama del Gobierno de Bukele, el tema de las criptomonedas. Durante su mandato, El Salvador dio un paso importante al adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, convirtiéndose así en el primer país en el mundo en hacerlo. A pesar de recibir críticas y de no contar con un respaldo abrumador de la población en esta cuestión, el presidente se mantuvo firme en su decisión, siendo su principal apuesta económica aún después de la marcada caída de su valor. Según advirtió el Fondo Monetario Internacional, existen riesgos considerables con el uso de bitcoin como moneda de curso legal, en especial dada la volatilidad elevada de su precio. Por lo tanto, no se recomienda ya que, a corto plazo, los costos y riesgos superan los beneficios (FMI, 2022).

La situación de violencia prevaleciente en El Salvador tiene un coste económico significativo que incluye gastos en salud, costes institucionales (legales, judiciales y policiales), costes preventivos en seguridad privada, y pérdidas materiales (Acevedo, 2008). Según el informe del Índice Global de la Paz 2021, la violencia costó a la economía salvadoreña 11 566 M \$, lo que equivale al 19 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país (IEP, 2022). Esto lo sitúa en el decimocuarto puesto del mundo y en el tercero de Latinoamérica, por detrás de Colombia y Venezuela.

En realidad, el escaso avance económico en este país centroamericano ha representado un obstáculo significativo para la generación de empleo, en especial en zonas marginadas donde la presencia de pandillas es muy elevada.

3.2. Enfrentamiento inclemente: la lucha contra la violencia

Desde que asumió la presidencia con un discurso contundente contra las pandillas, Nayib Bukele rechazó cualquier proceso de

⁴ Vice President Kamala (@VP) 3-05-21

negociación y anunció la implementación de un plan para retomar el control de las áreas dominadas por estos grupos criminales y eliminar sus fuentes de recursos.

Debemos tomar en consideración que, en El Salvador, las maras o pandillas han ido adquiriendo cada vez más poder hasta que se han convertido en un *poder de facto* al que las distintas legislaturas han tenido que enfrentarse a través de diferentes planes de seguridad con escasos resultados.

El 20 de junio de 2019, Bukele lanzó el llamado Plan de Control Territorial, anunciado a través de su cuenta de Twitter⁵, una estrategia integral que ha implementado en varias fases (Gobierno de El Salvador, 2022) y que ha reducido sistemáticamente la tasa de homicidios en El Salvador, la más baja desde que terminó la guerra civil, lo que ha infundido una mayor confianza entre la población. Cuenta con varias fases

- Fase 1. Preparación: incluyó el control de los territorios y el componente represivo contra los criminales. Los objetivos del Gobierno para la primera fase eran tomar el control del territorio y cortar las comunicaciones de las bandas con las cárceles de máxima seguridad.

Hacia finales de junio de 2019, funcionarios de prisiones encontraron manuscritos de pandillas que ordenaban ataques contra la policía salvadoreña. Poco después, un agente de policía fue asesinado.

Tras este incidente, el presidente declaró el estado de emergencia en todas las prisiones salvadoreñas, lo que permitió a las autoridades detener las visitas y promulgar medidas severas. Una de las más rigurosas fue el encierro de los reclusos en todas las prisiones de máxima seguridad, a los que no se les permitía salir de sus celdas. Además, el jefe del Gobierno ordenó que los miembros de bandas rivales fueran alojados juntos en las mismas celdas de la prisión, algo que nunca se había hecho antes, y que se cortaran todas las comunicaciones desde las cárceles.

Por último, como parte de la primera fase del Plan de Control Territorial, los líderes de las bandas de alto rango y los sospechosos de ordenar homicidios desde la cárcel fueron trasladados a prisiones de máxima seguridad.

⁵ «Dios, guía nuestro plan». Nayib Bukele (@nayibbukele) 20-06-19. [Twitter] Disponible en: <https://twitter.com/nayibbukele/status/1141247613863415808>

Estas medidas estrictas tomadas por la administración Bukele hacia los reclusos han recibido la condena internacional de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

- Fase 2. Oportunidades: ejecutada desde el 2 de julio de 2019 y orientada a generar mejores condiciones para los jóvenes y a prevenir la violencia, consiste en la reconstrucción social de las comunidades y la formación de los jóvenes. El presidente Bukele ha manifestado en diversas ocasiones que quiere dar a los jóvenes otras opciones que no sean unirse a las bandas. En este sentido, declaró que, para eliminar las bandas, «tenemos que dificultar a las organizaciones criminales el reclutamiento de nuevos miembros». Una forma de hacerlo es dar alternativas a los jóvenes.

Durante la segunda fase, el Gobierno pretende formar a los jóvenes en distintos campos para que puedan encontrar un empleo adecuado y mantenerse alejados de las organizaciones delictivas, y crear centros comunitarios (Cubos) donde puedan dedicar su tiempo a actividades productivas, manteniéndolos alejados de las bandas.

- Fase 3. Modernización de las fuerzas de seguridad: ejecutada desde el 30 de julio del 2019, esta fase se centra en la modernización de los equipos que utilizan las fuerzas de seguridad, lo que incluye drones, equipos de visión nocturna y cámaras de vídeo. También implica un mejor equipamiento como armas, chalecos antibalas, unidades de patrulla y uniformes. La Administración quiere modernizar la policía nacional dotándola de equipos de última generación para luchar contra el crimen organizado y que esté mejor protegida.

Por el contrario, el diario independiente *El Faro* denunció estas medidas y publicó un reportaje detallado que acusaba al Ejecutivo de haber estado negociando con la MS13 desde octubre de 2019. Según el líder de la pandilla, que proporcionó la información, el acuerdo implicaba una reducción de los homicidios y apoyo al partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas de 2021 a cambio de favores (Martínez, 2020)

Además, en agosto de 2021, este mismo rotativo dio a conocer cómo el fiscal general Raúl Melara había estado investigando presuntas conversaciones entre el Gobierno y las principales maras del país, lo que dio lugar a su destitución el 1 de mayo. Según el informe, el Gobierno había otorgado beneficios carcelarios a algunos miembros de pandillas y había proporcionado mayores

oportunidades de empleo para aquellos que no estaban en prisión a cambio de una disminución en la tasa de homicidios en el país.

El periódico *El Faro* hace todo lo posible por continuar su labor de investigación a pesar de las presiones que ha venido soportando por parte del Gobierno, con escuchas telefónicas, acusaciones públicas de vínculos con bandas o blanqueo de dinero. La mitad de la redacción tuvo que huir del país al temer por su vida o la de sus familias (García, 2022), ya que se han convertido en la bestia negra del régimen y el principal medio de oposición del país al ser uno de los pocos que se atreven a criticar al Gobierno.

Puede parecer que, en sus ataques a la prensa, sigue una pauta común vista en otros líderes regionales que le precedieron, desde Hugo Chávez en Venezuela hasta Daniel Ortega en Nicaragua, con consecuencias devastadoras para la libertad de prensa y las instituciones democráticas.

Lo que sí es un hecho constatado es la drástica reducción de los homicidios en casi un 50 % en todo el país entre 2019 y 2020. Sin embargo, las razones detrás de esta disminución siguen siendo ambiguas. A pesar de que el presidente Nayib Bukele niega haber sostenido diálogos formales con las pandillas, es importante mencionar que, según una investigación llevada a cabo por InSight Crime, sus interacciones con la MS13 y Barrio 18 datan de su periodo como alcalde de San Salvador (Dudley y Papadovassilakis, 2020)

Este supuesto acuerdo con las pandillas y, potencialmente, con otros actores violentos para reducir la tasa de homicidios destaca asimismo por la disminución del enfoque gubernamental en la persecución de la delincuencia organizada. Delitos como el contrabando, el tráfico de armas y drogas, y la corrupción, que son aspectos cruciales en la lucha contra el crimen, sorprendentemente no se incluyen entre las prioridades gubernamentales (Aguilar, 2020).

- Fase 4. Incursión: en vigor desde el 19 de julio del 2021, finalizará dentro de cinco años. Tiene como objetivo recuperar los territorios en las comunidades donde operaban los pandilleros. Prevé el despliegue de más efectivos de la policía y el Ejército en zonas con fuertes actividades delictivas. Durante esta fase se colocarán más soldados, de modo que se pretende duplicar su número, de veinte mil a cuarenta mil. Esto es algo con lo que no están de acuerdo muchos de los opositores del Gobierno.

Sin embargo, en noviembre de 2021 se produjo una matanza en tan solo tres días, con un promedio de quince asesinatos diarios, lo que contrastó notablemente con la cifra promedio de 2,4 homicidios diarios registrados entre junio y octubre. Lo que resulta destacable para los expertos en seguridad pública es que, después de este aumento repentino de la violencia en tres días, para el 12 de noviembre no se informaron homicidios y un día después solo se registró uno. El Gobierno no pudo proporcionar ninguna explicación para esta disminución y optó por responsabilizar a los políticos del pasado, por supuesto, a través de Twitter⁶.

Algunos analistas son de la opinión de que, en el contexto del pacto con las pandillas, esto pudo significar una advertencia o medida de presión para el Gobierno respecto a algún desacuerdo o incumplimiento (Marroquín, 2021).

En marzo de 2022 se produjo la peor matanza del siglo en el país: ochenta y siete asesinatos en tres días que condujeron a la aprobación de un régimen de excepción por parte de la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista dentro del plan seguridad para combatir a las pandillas, lo que se ha convertido en la norma. Todo esto en medio de la supuesta negociación entre el Gobierno y las maras. Con ello, el Gobierno ha logrado acorrallar a estos grupos criminales y reducir a mínimos históricos una violencia que ya venía a la baja.

Con este estado de emergencia —prorrogado *sine die*— que otorga mayores poderes a la policía y a la justicia para luchar contra las maras, en menos de seis meses más de 58 000 personas habían sido encarceladas, el 2 % de la población. Según Nayib Bukele, este el precio a pagar por la paz (Cuviller y Comin, 2022). Organizaciones sociales, tanto nacionales como internacionales, han registrado numerosas denuncias relacionadas con presuntas violaciones de los derechos humanos. También han señalado que se han producido detenciones arbitrarias y casos de tortura, aunque la población en general se muestra contenta y apoya a su presidente.

La suspensión de los derechos de los detenidos ha sido duramente criticada por organismos internacionales. Consideran que

⁶ «Los gobiernos anteriores acostumbraban a negociar con la sangre de la población, a conveniencia incrementaban o bajaban las cifras de violencia en el país. Nosotros estamos combatiendo frontalmente a estos criminales, NO vamos a regresar al pasado». Gobierno de El Salvador (@Gobierno_SV) 13-11-21. [Twitter] https://twitter.com/Gobierno_SV/status/1459396383342055430

se ha militarizado el país y las detenciones arbitrarias se están ejecutando a través de las fuerzas militares.

De igual manera, se introdujeron cambios en la ley de presupuesto para el año 2022 con el fin de establecer una nueva partida presupuestaria denominada «Programa Especial de Combate a Actos de Terrorismo». Esta partida estuvo bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y se le asignaron 60 M \$ tras una modificación aprobada por la Asamblea Legislativa.

Tasa de homicidios en El Salvador⁷

AÑO	Total homicidios	Tasa diaria de homicidios	Homicidios por cada 100 000 habitantes
2023 (1-01/15-09)	103	0,40	2.3 *Estimación
2022	495	1,4	7.8
2021	1147	3,1	18.1
2020	1341	3,7	20
2019	2398	6,6	36
2018	3346	9,2	50
2017	3962	10,9	60
2016	5280	14,5	81
2015	6656	18,2	103
2014	3921	10,7	61
2013	2499	6,8	40
2012	2594	7,1	41
2011	4371	12,0	70
2010	4004	11,0	64

Fuente: Policía Nacional Salvadoreña. PNC y El Salvador Info

En 2022 El Salvador registró la tasa de homicidios más baja que se recuerda desde 2014. Solamente entre enero y diciembre de 2022 se pasó de casi dieciocho casos a menos de ocho por cada cien mil habitantes, similar a la de Estados Unidos. Estas cifras constatan el éxito de las políticas contra la delincuencia llevadas a cabo por el ejecutivo (Statista, 2023).

⁷ Estas estadísticas de homicidios para 2022 y 2023 no incluyen las muertes de pre-suntos pandilleros que se han producido en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad salvadoreñas: 120 muertes en 2022 y 32 en lo que va de 2023. A día de hoy, la tasa de homicidios es de 0,41 al día o 2,3 asesinatos por cada 100 000 habitantes.

En medio del régimen de excepción se produjo la inauguración de una cárcel llamada «Centro de Confinamiento del Terrorismo», una megacárcel con capacidad para cuarenta mil personas. Las fotos que mostraban a los pandilleros encarcelados con los tatuajes que los identifican como miembros de las maras han dado la vuelta al mundo.

Tanto es así que se ha convertido, según la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), en el país del mundo con la tasa más alta de presos, con seiscientos cinco por cada cien mil habitantes (WOLA, 2023) en un país que ya tenía fama de tener las cárceles muy pobladas.



Figura 2: Presos hacinados en la cárcel. Fuente: Reuters

Es evidente que el estado de emergencia ha cambiado la vida cotidiana de la gente, en todo el país las personas disfrutaban de su nueva libertad.

- Fase 5. Extracción: se dio a conocer el 23 de noviembre de 2022. Consiste en extraer a los pandilleros que todavía se esconden en barrios de todo el país. Durante esta fase, las fuerzas de seguridad cercarán los municipios más grandes para extraer a todos los pandilleros restantes, con catorce mil efectivos adicionales entre militares y nuevos policías. «Vamos a ir y vamos a atrapar a los delincuentes a donde quiera que estén, a donde quiera que se escondan, pueden correr, pueden esconderse por un tiempo, pero tarde o temprano la justicia los va a alcanzar» declaró el presidente Bukele.

En la zona de Soyapango, donde se ubican las colonias de La Campanera y Las Margaritas, sumamente asediadas por pandillas, esta fase comenzó con el cerco de 8500 soldados y 1500 agentes rodeando la ciudad⁸.

Hay que destacar que la vida en los barrios de El Salvador estuvo acotada por líneas invisibles pero infranqueables durante décadas, fronteras que marcaban las zonas controladas por las diferentes pandillas. La población no podía pasar de un barrio a otro libremente. La sociedad salvadoreña llegó a un punto tal de degeneración, especialmente en las zonas de violencia, que, en los pasajes o calles de los barrios, a lo que aspiraban los niños era a convertirse en «palabrero»⁹, un miembro de alto rango de la pandilla.

Con el régimen de excepción, ahora no hay fronteras entre las distintas colonias, se puede caminar con tranquilidad y los modestos negocios que antes debían pagar extorsión a las maras operan sin problemas. Pero se teme que las maras que han huido de las ciudades se estén reagrupando en el campo, en zonas aisladas, reorganizándose y rearmándose para adaptar su sistema mafioso a esta nueva realidad. Por ello, para retrasar la respuesta de las bandas, las fuerzas policiales siguen acelerando el ritmo de las detenciones.

El Gobierno habilitó una línea telefónica —el número 123— para que la gente pudiese hacer denuncias anónimas, pero algunos han utilizado este recurso como medio para resolver disputas personales con sus vecinos.

Hay expertos que indican que esta administración, caracterizada por fomentar la hostilidad, evoca el periodo de la guerra civil, cuando el Gobierno alentaba a los ciudadanos a denunciar a los insurgentes y a sus simpatizantes (Raziel, 2023).

- Fase 6. Integración: fue comunicada por Bukele en su discurso a la nación del 15 de septiembre de este año. Se materializará con la próxima creación de la Dirección Nacional de Integración Nacional, entidad que, según el Gobierno, se centraría en las necesidades a medio y largo plazo.

⁸ Gobierno de El Salvador en Twitter (@Gobierno_SV) 3-12-22. [Tweet] <https://twitter.com/DefensaSV/status/1598984298316455936>

⁹ El palabrero en una mara es alguien que tiene influencia y respeto entre los miembros de la pandilla. Sus responsabilidades pueden incluir la toma de decisiones en asuntos internos de la pandilla, la resolución de conflictos entre miembros, la coordinación de actividades criminales y, en algunos casos, la representación de la pandilla en relaciones con otras pandillas o grupos delictivos.

Entre las atribuciones que tendría la nueva Dirección Nacional de Integración está coordinar un sistema integral de capacitación con enfoque laboral, aprobar programas de capacitación y generar programas para reducir la pobreza.

Nayib Bukele ha anunciado su intención de buscar la reelección presidencial en 2024, aunque la Constitución prohíbe dos mandatos consecutivos de un presidente, sin proporcionar detalles sobre su estrategia para lograrlo. Esta decisión ha generado críticas por parte de sus opositores y ha suscitado debates en torno a su posible incompatibilidad con la carta magna¹⁰.

Casi todo el mundo da por hecho que el estado de excepción seguirá vigente al menos hasta las presidenciales del año que viene. Mientras tanto, la popularidad del presidente crece en paralelo a las alertas por su deriva autoritaria.

4. Papel de los actores externos

La relación entre El Salvador y Estados Unidos ha sido tradicionalmente un elemento fundamental en la política exterior del país centroamericano. Bajo la presidencia de Donald Trump, estas relaciones se han mantenido estrechas y el propio Bukele ha sido visto como un aliado de la administración estadounidense en asuntos críticos como la lucha contra el narcotráfico o la migración, sobre todo por la presencia de organizaciones criminales transnacionales.

Sin embargo, Estados Unidos, siendo el destino principal de los salvadoreños que abandonan sus hogares —las remesas son una fuente vital de ingresos para El Salvador y representan una parte significativa de su PIB—, puso condiciones a su ayuda económica para Centroamérica. Exigió que la región implementara medidas específicas destinadas a reducir la llegada de migrantes irregulares a su frontera. En respuesta, el Gobierno de Bukele firmó un acuerdo semejante a los conocidos como «tercer país seguro». Este acuerdo permitía recibir a solicitantes de asilo mientras aguardaban la regularización de su situación en Estados Unidos, una medida que ya habían adoptado México, Guatemala y Honduras.

¹⁰ Aunque los magistrados de la Sala Constitucional ya han realizado una interpretación poco convencional de las leyes en la que afirman que no hay obstáculo para la reelección si Bukele deja el cargo seis meses antes.

No obstante, la llegada de Joe Biden al poder revirtió la situación. El planteamiento fue que, para poner fin a la migración, es esencial abordar sus causas fundamentales, lo que engloba la corrupción, la debilidad de las instituciones, la inseguridad y la impunidad.

Biden declinó una solicitud de reunión por parte del presidente salvadoreño durante su visita a Washington. Este gesto fue interpretado como una expresión de la preocupación de la Administración norteamericana por la situación del Estado de derecho y la democracia en El Salvador (*BBC*, 2021b).

Bukele ha recurrido a sus redes sociales cada vez con mayor frecuencia para expresar críticas hacia Estados Unidos, una tendencia que ha sido seguida por varios funcionarios del Departamento de Estado en Washington al cuestionar políticas o posturas adoptadas por el presidente salvadoreño.

Cuando anunció su intención de buscar la reelección a pesar de la prohibición constitucional, la Casa Blanca respondió con medidas que incluyeron sanciones contra su círculo más cercano, la revocación de visados y el congelamiento de activos de una decena de funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno debido a acusaciones de corrupción y comportamientos antidemocráticos.

Desde enero de 2021, Estados Unidos carecía de un embajador en El Salvador, ya que Ronald Johnson dejó su cargo tras la llegada de Joe Biden a la Presidencia. Desde entonces, la representación diplomática estaba a cargo de encargados de negocios hasta que, a principios de este año, William H. Duncan llegó a ocupar esta plaza.

No obstante, la administración Biden continúa cuestionando de manera constante la gestión de las actuales autoridades salvadoreñas y ha sumado dos nombres más a su lista de sanciones: el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro (*Europapress*, 2022).

Adicionalmente, el pasado 8 de septiembre, Estados Unidos y El Salvador firmaron un acuerdo por el que se permite la vuelta del Cuerpo de Paz estadounidense al país centroamericano, siete años después de que se retiraran por la inseguridad.

La ofensiva contra las pandillas y la reducción a más de la mitad de los asesinatos ha atraído el interés de otras naciones de la región que se enfrentan a este mismo problema y se plantean la posibilidad de importar esas mismas políticas de seguridad.

Tal es el caso de Honduras, que instauró un estado de emergencia similar, o de Guatemala, donde una candidata a la presidencia prometía en su campaña aplicar el sistema de seguridad de El Salvador.

El 2 de noviembre de 2019, el presidente Bukele expulsó a la diplomacia venezolana en un acto de coherencia con la posición de su Gobierno, ya que había sido uno de los veinte países que desconocieron al Gobierno de Nicolás Maduro en una votación de la Organización de Estados Americanos un mes antes. Se dio un plazo de cuarenta y ocho horas para que la delegación venezolana abandonara el territorio salvadoreño. Además, el Gobierno de El Salvador reconoció como legítima la administración de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Por otra parte, Bukele se ha acercado a China y ha reforzado el vínculo que ya inició en 2018 su antecesor Sánchez Cerén.

A finales de 2019, el presidente de la república, pese a que antes de tomar posesión lanzó duras críticas a China, realizó una visita oficial al gigante asiático donde se le ofrecieron una serie de megaproyectos, tales como un estadio, una biblioteca y una planta potabilizadora de agua. Esta armonía con Pekín no pareció tener un impacto negativo en su relación con EE. UU., su aliado internacional más importante.

Pero cuando la administración Biden cambió su rumbo de financiación a El Salvador, inmediatamente recibió un fondo de cooperación no reembolsable de 500 M \$ por parte de China.

El mandatario centroamericano ha manifestado en repetidas ocasiones sus deseos de ser un país abierto al mundo y su única condición es el respeto, lo que «aplica para cualquier nación»¹¹.

El papel de los agentes externos en El Salvador ha sido objeto de debate debido a la propuesta de la Ley de Agentes Extranjeros. Esta ley tiene como objetivo evitar la «injerencia» extranjera en el país y la financiación de organizaciones políticas y ONG. Esta ha sido comparada con la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros aprobada en Nicaragua en 2020 (*El Tiempo*, 2021).

El presidente Nayib Bukele respaldó ante la última Asamblea General de las Naciones Unidas las políticas de seguridad implementadas por su Administración. En su discurso, el mandata-

¹¹ Casa Presidencial vs (@PresidenciaSV) 27-07-22. En Twitter <https://twitter.com/PresidenciaSV/status/1563322279433740288?>

rio rechazó las críticas dirigidas hacia sus medidas, algunas de las cuales han sido objeto de preocupación a nivel internacional debido a posibles violaciones de los derechos humanos.

5. Conclusiones y prospectiva

La población salvadoreña, que ha sufrido los embates de juntas militares, una prolongada guerra civil y el acoso de las maras, anhela la paz. Es comprensible que la gente celebre la posibilidad de vivir en un entorno más tranquilo. Sin embargo, lo que genera inquietud son las limitaciones a la democracia, la reducción o disolución de la separación de poderes y la restricción a la libertad de prensa que se están imponiendo.

Los salvadoreños eligieron fortalecer la autoridad presidencial y otorgarle una autonomía prácticamente absoluta, con un nivel de aprobación de casi el 90 % hoy en día. Hay que decir que esta elección se manifestó a través de procesos democráticos y, por lo tanto, merece ser respetada.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que esta situación también plantea un escenario preocupante en lo que respecta a sus posibles consecuencias a largo plazo.

El modelo político impuesto por Bukele y su estrategia de seguridad han conseguido una reducción de la criminalidad hasta índices jamás soñados, convirtiéndose en el país más seguro de América Latina, y estos resultados son incontestables.

Las pandillas ya no son ese Estado paralelo que ponía en solfa continuamente a las fuerzas de seguridad y a la propia sociedad salvadoreña.

Sin embargo, habría que preguntarse cuál es el precio que se ha de pagar por conseguir ese estado de bienestar y si esa caída de la violencia no podría ser solo temporal.

Sería interesante abordar las causas más profundas que llevaron a este país al borde del abismo, incluidas la pobreza extrema y la corrupción.

Bukele recurre de nuevo a tácticas utilizadas por sus antecesoras a pesar de que se ha demostrado con anterioridad que no tienen un impacto significativo en la resolución de un problema intrínsecamente complejo. La violencia no parece ser la solución definitiva, y esto se evidencia aún más debido a que el poder arraigado de estas pandillas está estrechamente vinculado, como

decimos, a la profunda desigualdad y a la pobreza que El Salvador ha enfrentado durante décadas.

Justificar el régimen de excepción en este momento bajo la medida de que hay una perturbación al orden público que ya no existe es difícil, pero el ministro de Justicia está convencido que se seguirá prorrogando hasta que se capture al último pandillero. Sin embargo, esto parece ser más que nada una herramienta que le permite al presidente convertirse en el adalid de El Salvador, en especial si se tiene en cuenta que el Gobierno cuenta con una sólida maquinaria de comunicación y que ha desarrollado una estrategia de *marketing* efectiva que promueve la noción de que la seguridad prevalece sobre los derechos humanos.

Algunas voces auguran un futuro sombrío y apuntan a cómo se multiplican los indicios de un régimen dictatorial.

Mientras tanto, el presidente busca continuar su mandato y perpetuarse en el poder. Aun cuando la Constitución no lo permite, un fallo de los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nombrados el año pasado, podría llevar a El Salvador a tomar un camino en el que se enmascare la oligarquía tras una reforma de carácter pseudodemocrático, pero que, en realidad, tendría la intención última de perpetuar a Bukele en un poder absoluto que se justificaría, por decirlo de alguna forma, por la necesidad de erradicar el poder de las maras en aras de una sociedad salvadoreña más segura que pueda salir de la pobreza y la migración.

6. Bibliografía

- Acevedo, C. (2008). Los costos económicos de la violencia. en El Salvador. *América Latina Hoy*, 50. Disponible en: <https://doi.org/10.14201/alh.1341> [consulta 20 junio 2023].
- Aguilar, Jeanette (2020). *Bukele y su política de seguridad*. FAC-TUM. [en línea] Disponible en: <https://www.revistafactum.com/bukele-seguridad/> [consulta 20 febrero 2023].
- Alemán, M. (2019). Salvador: tregua de pandillas fue una política de Estado. *AP News*. Disponible en: <https://apnews.com/general-news-6c55c6fd74c04cdb84dbca49284981bc> [consulta 10 enero 2023].
- Amnistía Internacional (2023). *Informe 2022/23. El Salvador*. [en línea]. [consulta 10 agosto 2023] Disponible en: <https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/el-salvador/>

- BBC (2021a). Nayib Bukele, el presidente «del cambio» al que acusan de dar un «golpe» a la Corte Suprema de El Salvador. *BBC*. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56970298> [consulta 11 enero 2023].
- BBC (2021b). 3 cambios que el gobierno de Joe Biden ya introdujo en las relaciones de EE. UU. con América Latina. *BBC* [en línea]. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56050026>. [consulta 15 de septiembre 2022].
- CEDEMA (2007). *Aproximación a la historia de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL)*. CEDEMA, Centro de Documentación de los Movimientos Armados. [consulta 11 agosto 2023] Disponible en: https://cedema.org/digital_items/1730
- Cuviller, L. y Comin, M. (2022). La guerra total de Nayib Bukele contra las pandillas. [Vídeo] *France 24*. Disponible en: <https://www.france24.com/es/programas/reporteros/20221206-la-guerra-de-nayib-bukele-contra-las-pandillas-el-salvador>
- Dada Hirezi, Héctor (2017). *La situación de El Salvador: antecedentes, evolución y retos*. Fundación Heinrich Böll. Disponible en: https://mx.boell.org/sites/default/files/la_situacion_de_el_salvador.pdf
- Dudley, Steven y Papadovassilakis, Alex (2020). *Cómo lidia con las pandillas el presidente Bukele de El Salvador*. InSight Crime. [en línea] Disponible en: <https://es.insightcrime.org/investigaciones/lidia-pandillas-bukele-el-salvador-2/> [consulta 18 febrero 2023].
- El Mundo (2023). ¿Cuáles fueron los Acuerdos de Paz en El Salvador y qué han dicho sus actores políticos?. *El Mundo*. Disponible en: <https://diario.elmundo.sv/politica/cuales-fueron-los-acuerdos-de-paz-en-el-salvador-y-que-han-dicho-sus-actores-politicos>
- El Salvador Times (2019). Bukele lanza oficialmente la CICIÉS: «Va a empezar a operar con los casos que se pueden ver desde ya». *El Salvador Times*. Disponible en: <https://www.elsalvadortimes.com/articulo/politicos/nayib-bukele-lanza-oficialmente-cicies-es-clamor-pueblo-combata-corrupcion/20190906104644062570.html> [consulta 12 enero 2023].
- El Tiempo (2021). El Salvador: de qué se trata la ley de agentes extranjeros que apoya Bukele. *El Tiempo*. [en línea] Disponible en: <https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/el-salvador-de-que-va-la-ley-de-agentes-extranjeros-que-promueve-bukele-631274>. [consulta 18 de enero 2023].

- Europa Press (2022). Estados Unidos confirma al nuevo embajador en El Salvador tras casi dos años de ausencia. *Europa Press*. [en línea] Disponible en: <https://www.europapress.es/internacional/noticia-estados-unidos-confirma-nuevo-embajador-salvador-casi-dos-anos-ausencia-20221214164650.html> [consulta 15 de enero 2023].
- FMI (2022). *La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos*. FMI. Disponible en: <https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/02/15/cf-el-salvadors-comeback-constrained-by-increased-risks> [consulta 15 enero 2023].
- Galeas, G. (2018). *¿Quién es Nayib Bukele?* San Salvador, El Salvador.
- García, Jacobo (2022). 22 periodistas e integrantes de 'El Faro', espionados con Pegasus durante el mandato de Bukele. *El País*. [en línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2022-01-13/la-redaccion-de-el-faro-de-el-salvador-ha-sido-espiada-con-pegasus-durante-el-gobierno-de-bukele.html> [consulta 20 febrero 2023].
- Gobierno de El Salvador (2022). *En el tiempo que lleva el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el Plan Control Territorial es la mejor defensa del pueblo ante la agresión de las pandillas*. Gobierno de El Salvador. Disponible en: <https://www.presidencia.gob.sv/en-el-tiempo-que-lleva-el-gobierno-del-presidente-nayib-bukele-el-plan-control-territorial-es-la-mejor-defensa-del-pueblo-ante-la-agresion-de-las-pandillas/> [consulta 12 febrero 2023].
- González Armando, L. A (1997). 1970-1992: dos décadas de violencia sociopolítica. 1997. *Revista Estudios Centroamericanos (ECA)*. Disponible en: <http://www2.uca.edu.sv/publica/eca/588com1.html> [consulta 4 julio 2023].
- (1999). El Salvador de 1970 a 1990: política, economía y sociedad. Realidad. *Revista De Ciencias Sociales y Humanidades*, (67), pp. 43-61.
- Grenni Montiel, H. R. (2015). *El Salvador en tiempos de Monseñor Romero: contradicciones de un periodo de violencia. La evolución del pensamiento de Romero*. Universidad Pablo de Olavide.
- Human Rights Watch. (2022). *Informe Mundial*. El Salvador. Disponible en: <https://www.hrw.org/es/world-report/2023/country-chapters/el-salvador>
- IEP (2022). *Global Peace Index 2022*. Institute for Economics & Peace (IEP). Sydney. Disponible en: <http://visionofhumanity.org/resources> [consulta 10 enero 2023].

- Juárez Ávila, G. (coord.). *Historia y debates sobre el conflicto armado salvadoreño y sus secuelas*. Universidad de El Salvador. Fundación Friedrich.
- Lohmuller, Michael (2016). *El Salvador impone medidas drásticas en cárceles, contra pandillas*. InSight Crime. Disponible en: <https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/salvador-impone-medidas-drasticas-carceles-pandillas/>
- Marroquín, David (2021). Noviembre sigue con aumento de homicidios: 97 muertos en 23 días. *El Salvador.com*. [en línea] Disponible en: <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-sigue-aumento-noviembre-2021/903485/2021/> [consulta 20 febrero 2023].
- Martínez Peñate, O. (2015). *El Salvador. Historia General*. Editorial Nuevo Enfoque.
- Martínez, Oscar *et al.* (2020). Gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 reducción de homicidios y apoyo electoral. *El Faro*. Disponible en: https://elfaro.net/es/202009/el_salvador/24781/Gobierno-de-Bukele-lleva-un-a%C3%B1o-negociando-con-la-MS-13-reducci%C3%B3n-de-homicidios-y-apoyo-electoral.htm [consulta 20 febrero 2023].
- North, L. J. (1985). *Bitter grounds: roots of revolt in El Salvador*. Toronto, Between The Lines.
- Pastor Gómez, M. L. (2016). El Salvador: un Estado que no quiere ser fallido, en *Panorama Geopolítico de los Conflictos 2016*. IEEE. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2016.pdf [consulta 10 enero 2023]
- (2020). *La influencia política de las maras en El Salvador*. [en línea]. Documento de Análisis IEEE 32/2020. . Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA32_2020LUIPAS_marasSalvad [consulta 10 enero 2023].
- Raziel, Zedryk (2023). El Salvador: el infierno de los inocentes enviados a prisión por una llamada anónima. *El País*. [en línea] Disponible en: <https://elpais.com/internacional/2023-08-26/el-salvador-el-infierno-de-los-inocentes-enviados-a-prision-por-una-llamada-anonima.html> [consulta 10 de septiembre 2023].
- Sherman, Christopher (2021). Nayib Bukele, el polémico y populista líder de El Salvador. *The San Diego Union Tribune*. Disponible en: [333](https://www.sandiegouniontribune.com/en-es-</p></div><div data-bbox=)

- panol/noticias/story/2021-07-04/nayib-bukele-el-polemico-y-populista-lider-de-el-salvador [consulta 10 febrero 2023].
- SRD (2023). *Tasa de Homicidios de El Salvador*. Statista Research Department. Disponible en: <https://es.statista.com/estadisticas/1337015/el-salvador-tasa-de-homicidios> [consulta 15 septiembre 2023].
- Urbina, J. (2022) El Salvador en lista de principales países de tráfico de drogas. *La Prensa Gráfica*. Disponible en: <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-en-lista-de-principales-paises-de-trafico-de-drogas-20220920-0091.html> [consulta 11 agosto 2023]
- WOLA (2023). *Un año sin libertades civiles en El Salvador: cuando la excepción se convierte en regla*. WOLA. Disponible en: <https://www.wola.org/es/2023/03/ano-sin-libertades-civiles-el-salvador-cuando-excepcion-convierte-regla/> [consulta 20 mayo 2023].

Tabla de Cronología del conflicto

CRONOLOGÍA DEL CONFLICTO	
FECHA	ACONTECIMIENTOS
1972	El general Arturo Armando Molina da un golpe de Estado e instaura un régimen militar. Esto marca el comienzo de un periodo de Gobiernos militares en El Salvador.
1977	En enero se llevan a cabo elecciones presidenciales en medio de acusaciones de fraude electoral. José Napoleón Duarte, líder de la Democracia Cristiana, denuncia el fraude y lidera «el golpe de Estado cívico-militar». Esto desencadena la lucha armada.
1980	La guerra civil estalla oficialmente cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), una coalición de grupos guerrilleros de izquierda que lanza una ofensiva armada contra el Gobierno militar
1980	El arzobispo Óscar Romero, defensor de los derechos humanos, es asesinado a tiros mientras oficiaba misa. Su asesinato genera condena internacional y aumenta la presión sobre el Gobierno salvadoreño.
1981	Estados Unidos comienza a proporcionar un fuerte apoyo militar y económico al Gobierno salvadoreño.
1984	Se realizan elecciones presidenciales en medio de la guerra civil. José Napoleón Duarte, líder de la Democracia Cristiana, es elegido presidente.
1989	Se firma el acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla del FMLN, lo que pone fin a la guerra civil.
1992	Primeras elecciones presidenciales democráticas desde el inicio de la guerra. Alfredo Cristiani, del partido ARENA, se convierte en presidente.
1993	Se establece la Comisión de la Verdad, que investiga los abusos de derechos humanos cometidos durante la guerra civil y publica un informe que detalla graves violaciones.
2001	El Salvador adopta el dólar estadounidense como su moneda oficial para estabilizar la economía.
2009	Mauricio Funes, candidato del FMLN, se convierte en el primer presidente de izquierda en la historia de El Salvador.
2014	Salvador Sánchez Cerén, también del FMLN, asume la presidencia.
2019	Junio. Nayib Bukele gana las elecciones y asume la presidencia de El Salvador. Se rompe con décadas de bipartidismo entre los partidos ARENA y FMLN.
2019	20 de junio. El presidente Nayib Bukele, junto a las Autoridades de Seguridad, anuncia la implementación del Plan Control Territorial.
2021	Febrero. Elecciones legislativas y municipales: el partido Nuevas Ideas, liderado por Nayib Bukele, obtiene una victoria aplastante, ganando la mayoría en la Asamblea Legislativa.
2021	Mayo. La Asamblea Legislativa destituye y reemplaza a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general.
2022	27 de marzo. Se aprueba por primera vez el estado de excepción.
2022	Septiembre. Bukele anuncia su intención de buscar la reelección presidencial.
2023	Se inaugura la megacárcel con capacidad para 44 000 presos.

En la tabla adjunta a continuación, datos de 1 de agosto 2023 salvo expresión contraria. Fuente CIA, The World factbook.

TABLA DE INDICADORES GEOPOLÍTICOS	
Extensión 21 041 kilómetros cuadrados	
PIB en miles de millones de dólares 57,37 mil millones (2021 es.)	
Estructura PIB	Agricultura 12 % (2017 est.)
	Industria 27,7 % (2017 est.)
	Servicios 60,3 % (2017 est.)
PIB per cápita 9,100 (2021 est.)	
Tasa de crecimiento PIB 10,28 % (2021 est.)	
Relaciones comerciales en miles de millones de dólares (Exportaciones): 8,49 mil millones (2021 es.)	
Relaciones comerciales en miles de millones de dólares (Importaciones): 15,75 mil millones (2021 es.)	
Población 6 602 370 (2023 est.)	
Estructura de edad	0-14 25,4 %
	15-64 66,39 %
	Más de 65 8,21 % (2023 est.)
Tasa de crecimiento de la población 0,46 % (2023 est.)	
Grupos étnicos Mestizo 86,3 %, Blanco 12,7 %, Amerindio 0,2 % , Negro 0,1 %	
Religiones Católica 50 %, Protestante 36 %, Otras 2 %, Ninguna 12 % (2014 est.)	
Tasa de alfabetización de la población (Mayores de 15 años saben leer y escribir) 89,1 %	
Población bajo el umbral de la pobreza 22,8 % (2019 est.)	
Índice GINI 38,8 (2019 est.)	
Gasto militar. % del PIB. 1,2 % del PIB (2022 est.)	